

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN  
1596/2014  
QUEJOSO: \*\*\*\*\***

VISTO BUENO  
SR. MINISTRO

**PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA**

COTEJÓ

**SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ  
COLABORADORA: LAURA MÁRQUEZ MARTÍNEZ**

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al **tres de septiembre de dos mil catorce**, emite la siguiente:

**S E N T E N C I A**

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1596/2014 promovido en contra del fallo de veintisiete de marzo de dos mil catorce, dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el juicio de amparo directo \*\*\*\*\*.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si el tribunal colegiado de Circuito que emitió la sentencia de amparo realizó una interpretación directa del derecho humano a la libertad personal y de libre circulación previstos por los artículos 11,14 y 16 de la Constitución Federal y 8 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, si ello fuere así, analizar si tal interpretación resulta adecuada a los estándares constitucionales de este Tribunal Constitucional.

**I. ANTECEDENTES DEL CASO**

1. De la información que se tiene acreditada en el expediente consta que \*\*\*\*\* (de ahora en adelante el “detenido”, el “quejoso” o el “recurrente”) es un ciudadano mexicano, mayor de edad y con residencia en el Estado de México. Según información que se desprende de la averiguación previa \*\*\*\*\*de la Procuraduría General de la República, el veintidós de

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

noviembre de dos mil doce, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, esta persona fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, junto con otro individuo, cuando circulaba a bordo de un taxi en las inmediaciones de la ciudad de Toluca. A decir de los tres elementos captores, al hacer un recorrido de rutina por la zona, advirtieron que el referido vehículo circulaba a exceso de velocidad, por lo que le dieron alcance y le marcaron el alto<sup>1</sup>.

2. Una vez hecho lo anterior, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana requirieron a los tripulantes que apagaran la marcha del auto y descendieran del mismo, a fin de realizar una revisión preventiva a su persona y del citado taxi, a lo cual señalaron que los sujetos accedieron voluntariamente. Tras el registro corporal y la revisión del vehículo, se encontraron junto al freno de mano y en la parte trasera del automóvil una granada y una bolsa plástica de color negro con un vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana<sup>2</sup>.
3. En consecuencia, los elementos de seguridad detuvieron a los mencionados tripulantes y, tras la notificación de sus derechos, ese mismo día a las catorce horas con veinte minutos<sup>3</sup>, los presentaron ante la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Los citados hechos fueron controvertidos por el quejoso y la otra persona aprehendida, manifestando que fueron detenidos de manera separada por elementos de seguridad municipales, en otro lugar y un día antes, alegando que fueron interrogados, retenidos en un sitio desconocido y torturados.
4. Ahora bien, sentado lo anterior, se advierte indubitavelmente que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dio vista de la presentación de los detenidos, inició la carpeta de investigación

---

<sup>1</sup> Véase, hojas 7 a 12 del tomo I del cuaderno de la causa penal \*\*\*\*\*.

<sup>2</sup> *Idem*.

<sup>3</sup> *Ibidem*, hoja 60 a 67.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

\*\*\*\*\* y dictó un acuerdo de retención a las diecinueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

5. No obstante, tras el trámite correspondiente, la declaración ministerial del quejoso y de la otra persona detenida y el desahogo de varios actos de investigación, el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el aludido Agente del Ministerio Público emitió un oficio en el que remitió la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República, al identificarse que se actualizaba una competencia de índole federal, dejando a su disposición a las personas aludidas.
6. Ese mismo día, a las uno horas con cincuenta y ocho minutos, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, tuvo por recibida la carpeta de investigación y a los detenidos e inició la averiguación previa correspondiente, registrándola bajo el rubro \*\*\*\*\*.
7. Seguida la investigación, el veinticuatro de noviembre de dos mil doce, el citado agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra del ahora quejoso y de la otra persona por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de artefacto bélico denominado granada de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional<sup>4</sup> y por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (hipótesis de posesión del estupefaciente denominado Cannabis Sativa L. con fines de comercio en su variante de venta)<sup>5</sup>.
8. De tal acción penal correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien la radicó con

---

<sup>4</sup> Previsto y sancionado por el artículo 83 TER, fracción III, en relación con los diversos 11, inciso h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

<sup>5</sup> Previsto y sancionado en el artículo 476 de la Ley General de Salud, en relación con los numerales 13, apartado c, 473, 474, fracción IV, inciso a), 479 del mismo ordenamiento legal.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

número de causa \*\*\*\*\*, ratificó la detención material de los inculpados, recabó su declaración preparatoria y, el veintiséis de noviembre siguiente, dictó auto de formal prisión por la probable responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.

9. Dicha determinación fue modificada en apelación por el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, sólo en cuanto al delito de posesión de artefacto bélico denominado granada, cambiándolo por el de portación del mismo instrumento<sup>6</sup>.
10. Posteriormente, por auto de treinta de noviembre, a solicitud del defensor público federal del quejoso, se determinó que la causa penal se tramitaría en vía ordinaria y, seguidos los trámites procesales correspondientes, el tres de diciembre de dos mil doce, se declaró agotada la instrucción; por lo que el diecinueve de abril de dos mil trece se cerró el proceso y las partes – salvo el defensor– formularon sus conclusiones.
11. Consecuentemente, el dos de julio de dos mil trece, el Juez de Distrito dictó sentencia en la que condenó al quejoso y al otro detenido al encontrarlos penalmente responsables por el delito de portación de artefacto bélico denominado granada de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (hipótesis de posesión de Cannabis Sativa L. con fines de comercio en la variante de venta), imponiéndoles una pena de siete años de prisión y ciento ochenta días de multa<sup>7</sup>; asimismo, se decretó el decomiso del narcótico objeto del delito y se suspendió el ejercicio de los derechos políticos y civiles, negándose los beneficios de la sustitución de la pena de prisión y de condena condicional.
12. Inconformes con tal resolución, los sentenciados interpusieron recurso de apelación del cual conoció el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito,

---

<sup>6</sup> Previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con los numerales 8 y 11, inciso h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

<sup>7</sup> Equivalentes a diez mil seiscientos treinta y cuatro pesos 40/100 M.N., que en caso de insolvencia económica debidamente demostrada, le sería sustituido por ciento ochenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México, quien lo radicó con el número de toca penal \*\*\*\*\*y, mediante sentencia de veintitrés de octubre de dos mil trece, confirmó el fallo de primera instancia.

### II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

13. **Juicio de amparo directo.** En desacuerdo con esta última resolución, el ahora quejoso, por su propio derecho, promovió un juicio de amparo el quince de noviembre de dos mil trece, señalando como derechos transgredidos en su perjuicio los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16 y 21 de la Constitución Federal y 2,7, 8, 22 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
14. El veinticinco de noviembre de dos mil trece, el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo directo, admitió el asunto a trámite y lo registró con el número \*\*\*\*\*; seguido el procedimiento legal, en sesión de veintisiete de marzo de dos mil catorce, se declararon infundados los conceptos de violación y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal.
15. **Recurso de revisión.** En contra de la negativa de amparo, el once de abril de dos mil catorce, el quejoso interpuso recurso de revisión que fue remitido a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Presidencia del citado Tribunal Colegiado mediante acuerdo del día catorce del mismo mes y año.
16. El Presidente de este Tribunal Constitucional, por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil catorce, admitió el recurso de revisión con reserva del estudio de procedencia, ordenó registrarlo con el número 1596/2014 y lo turnó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de esta Primera Sala, para la elaboración del proyecto de resolución; asimismo, requirió

## **AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014**

notificar de tal admisión a las partes y a la Procuraduría General de la República.

17. Por último, mediante auto de treinta de abril siguiente, el Presidente de esta Primera Sala tuvo por recibido el expediente, señaló que la Sala se avocaba al conocimiento del asunto y que, en su oportunidad, se enviarían los autos al Ministro Ponente.

### **III. COMPETENCIA**

18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la “Ley de Amparo”), vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme al Punto Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un tribunal colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, lo cual es competencia exclusiva de esta Primera Sala y no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

### **IV. OPORTUNIDAD**

19. El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo correspondiente. La sentencia de amparo de veintisiete de marzo de dos mil catorce, terminada de engrosar el tres de abril del mismo año, se notificó personalmente a la parte quejosa –por medio de su representante legal– el nueve de abril de dos mil catorce<sup>8</sup>, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente; por lo que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió

---

<sup>8</sup> Hoja 125 del cuaderno del juicio de amparo \*\*\*\*\*.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

del once al veintinueve de abril del mismo año, sin contar en dicho cómputo los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete, por haber sido sábados y domingos, respectivamente, así como el dieciséis, diecisiete y dieciocho del mismo mes y año al ser inhábiles, de conformidad con los artículos 26 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el punto único del Acuerdo General número 18/2013 de diecinueve de noviembre de dos mil trece del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

20. En tales condiciones, dado que del expediente se advierte que el recurso se presentó el once de abril de dos mil catorce en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resulta notorio que se promovió de manera oportuna.

### V. LEGITIMACIÓN

21. Esta Primera Sala considera que el recurrente está legitimado para interponer el presente recurso de revisión, pues queda probado que en el juicio de amparo directo se le reconoció la calidad de quejoso en términos del artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, la decisión adoptada en la sentencia de amparo directo sí puede afectarle o perjudicarlo de forma directa.

### VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

22. A fin de dar respuesta a la materia del presente recurso de revisión, es imprescindible hacer referencia a los conceptos de violación, a las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios esgrimidos.
23. **Demanda de amparo.** El quejoso planteó los siguientes argumentos en sus tres apartados de conceptos de violación:

## **AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014**

- a) En su primer concepto de violación, aduce que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1º, 11, 14, 16, 17 de la Constitución Federal, así como los preceptos 2, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y diversos preceptos de la legislación federal en materia penal.
- b) En primer lugar, porque la responsable hizo una aplicación errónea de la legislación federal, toda vez que aunque los ilícitos imputados se encuentran tipificados en el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, al caso le resulta aplicable el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, pues en realidad fue detenido por autoridades locales. A su decir, la detención se realizó por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fue presentado por ellos ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México quien inició en su contra una carpeta de investigación y hasta después fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
- c) Sostiene que la autoridad responsable citó artículos erróneos al señalar que “las diligencias de la Policía Judicial y las practicadas por los tribunales del orden común que pasen al conocimiento de los federales, no se repetirán para que estos tengan validez”, pues en ningún momento intervino la policía judicial dentro del sumario sino en todo caso el Ministerio Público Local; en esa línea argumentativa, asevera que no es válida la convalidación del órgano investigador federal, debido a que las pruebas obtenidas fueron ilegales porque los policías que revisaron el vehículo no tenían mandamiento legal para hacerlo y, además, debido a que en el fuero común se elaboró una carpeta de investigación y en el federal una investigación previa al estar vigente el sistema penal mixto, por lo que al tratarse de dos sistemas diferentes no podían convalidar las diferentes actuaciones.
- d) En relación con su detención, argumenta que fue ilegal y contraria a los presupuestos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y de la Constitución Federal, recalcando

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

expresamente que toda persona goza del derecho a la libertad personal que no puede ser afectada arbitrariamente por la autoridad.

- e) A su juicio, la libertad es una facultad que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y se traduce en la ausencia de sujeción o subordinación para hacer todo cuando no se oponga a las leyes, lo que también se traduce en una libertad corporal y de movimientos físicos protegida por el artículo 11 de la Constitución Federal que reconoce el derecho a la libertad deambulatoria.
- f) En consecuencia, alega que toda persona tiene derecho a la deambulación y solamente se puede restringir tal libertad de acuerdo a los requisitos que prevé el artículo 16 constitucional; es decir, con un mandamiento de autoridad.
- g) Sobre estos puntos, manifiesta que se efectuó una indebida detención, reteniéndolo sin informarle la razón por la cual lo detuvieron y sin realizar una inspección del lugar de los hechos (de la calle, si había en efecto un señalamiento de velocidad); considera además que si la detención inicial del vehículo fue porque venía a exceso de velocidad, lo cual le notificaron posteriormente, ello de ninguna manera facultaba a los policías para revisar el automóvil, pues de conformidad con el artículo 254 del Código Procesal Penal en la entidad, el ministerio público o la policía sólo pueden realizar una inspección cuando haya motivos suficientes para presumir que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito que se investiga.
- h) En su segundo concepto de violación, aduce de manera generalizada que el Ministerio Público del Estado de México no debió calificar de legal la retención ni tramitar la puesta a disposición o practicar ninguna otra diligencia alguna al no ser los hechos atribuidos de su competencia; asimismo, el órgano federal investigador no debió convalidar las actuaciones de su homólogo del fuero común, sino que debió verificar la legalidad de la detención de los procesados.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

- i) En su tercer concepto de violación, considera que resulta contra intuitivo que policías estatales –que no son de tránsito– detuvieran el vehículo por ir a exceso de velocidad y, si lo que motivó la detención fue tal violación de tránsito, ello por sí solo no puede levantar sospechas para revisar el vehículo y entonces encontrar estupefacientes y una granada de fragmentación. Por lo anterior, sostiene que no hubo flagrancia y que los policías no atendieron al mandamiento de una autoridad para afectar su libertad personal.
- j) Paralelo a lo anterior, explica que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no son elementos de tránsito para poder marcar el alto a los vehículos, por lo que se extralimitaron en sus funciones; de igual manera, dichas autoridades iban en una “*van express, color blanco, sin rótulos y no portaban ningún uniforme*”, ya que como obra en actuaciones el Ministerio Público del Fuero común no se describió la ropa que utilizaban los policías remitentes. En este sentido, sostiene que no tenían atribuciones para detener al vehículo “taxi” ni para revisarlo ni a las personas que se encontraban en su interior.
- k) En su último concepto de violación, insiste en que la detención fue inadecuada, dado que los elementos captores no tenía facultades para detener la marcha por exceso de velocidad, pasando por alto que el artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no contiene ninguna habilitación para detener y realizar la revisión de vehículos, violentando así el artículo 16 constitucional.
- l) Por último, expone que debieron considerarse los depositados de los testigos de descargo \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*, quienes declararon que el hoy recurrente no llevaba ningún objeto y señalan que la detención fue un día antes: el día veintiuno de noviembre de dos mil doce en Villa Victoria, y no el veintidós de noviembre de dos mil doce en Avenida \*\*\*\*\* en la colonia \*\*\*\*\*, como manifestaron falsamente los policías remitentes.

24. **Sentencia de amparo.** Las principales razones que esgrimió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para negar el amparo a los quejosos fueron, entre otras, las que siguen:

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

- a) Respecto a las violaciones procesales, considera que no se vulneró en perjuicio del inculpado lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues al revisar la causa penal \*\*\*\*\* y el toca penal \*\*\*\*\*, no se advierte que se hayan inobservado las formalidades esenciales del procedimiento dado que se llevó a cabo de manera adecuada la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de presentar alegatos, se dictó una resolución dirimiendo las cuestiones debatidas y se respetó el derecho impugnar tal resolución.
- b) En lo relativo a que las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, el Tribunal Colegiado explicó, por un lado, que la detención, la actuación del Ministerio Público del fuero común y su convalidación por el Ministerio Público Federal resultaban válidas. Primero, porque la autoridad local estaba facultada para conocer al menos del delito contra la salud dada la cantidad de narcótico asegurado<sup>9</sup>. Segundo, el hecho de que inicialmente el Ministerio Público del orden común haya formado una carpeta de investigación en la que desahogó diversas diligencias y, posteriormente, las remitió a la representación social de la Federación (al actualizarse un concurso entre un delito local y otro federal), no implica la invalidación de las primeras actuaciones, toda vez que el último párrafo del artículo 474 de la Ley General de Salud señala que los actos llevados a cabo por la autoridad que advirtió su incompetencia gozarán de plena validez.
- c) Asimismo, el órgano colegiado destacó que el Ministerio Público de la Federación desahogó por cuenta propia todas las diligencias llevadas a cabo por la autoridad local, por lo que aun cuando es infundado el argumento de invalidez del quejoso, no existiría ninguna afectación a su esfera jurídica.

---

<sup>9</sup> Toda vez que la cantidad de narcótico asegurado era inferior a la que resulta de multiplicar por mil los cinco gramos a los que se refiere la cuarta línea de la tabla que contempla el artículo 497 de la Ley General de Salud.

## **AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014**

- d) Por otro lado, en lo tocante a la detención, considera que si bien los elementos de Seguridad Ciudadana detuvieron el vehículo por considerar que iba a exceso de velocidad y, eso en principio, no constituía por sí la comisión de un delito, también es cierto que tales elementos actuaron en prevención de la ejecución o consumación de un acto ilícito al impedir que el conductor de dicho automotor continuara conduciendo de esa forma y si tal supuesto no constituye una detención formal por flagrancia, ello ocurrió en virtud de que en el interior del vehículo encontraron una granada de fragmentación y hierba seca con características de marihuana.
- e) En ese sentido, considera que no se vulnera el numeral 254 y 256 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, pues tienen que ver con diligencias realizadas durante la investigación de delitos de conocimiento previo, supuesto en el que no se encontraban los elementos de seguridad, sino que su actuación fue inmediata en la prevención de la comisión de delitos y preservación de la paz social, lo que produjo su intervención; además, como la detención atendió a la flagrancia en la posesión de narcótico y la portación de un artefacto bélico, era innecesario que los elementos aprehensores dieran cuenta o acreditaran qué encomiendas les habían dado sus superiores.
- f) Por las consideraciones previas, la sentencia declara infundados los primeros conceptos de violación del quejoso y estudia la acreditación de los elementos del tipo, valorando cada una de las pruebas y específicamente respecto a la falsedad de los policías remitentes que alega el impetrante, el Tribunal Colegiado afirmó que del estudio de las pruebas en su integridad, no se desprende dato alguno que haga patente que hubiesen inventado los hechos que narraron con la finalidad de afectar al quejoso, además de que su deposado se corrobora con la puesta a disposición, la inspección de la granada de fragmentación y del narcótico.
- g) En cuanto al resto de las pruebas, la sentencia señala que fueron correctamente valoradas y que de ellas se desprende que tanto el quejoso como el codetenido son penalmente responsables por la comisión de los delitos de portación de artefacto bélico denominado

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

granada, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, hipótesis de venta, del estupefaciente Cannabis Sativa L; respecto al cual confirmó la sanción y la negativa de beneficios.

- h) Finalmente, en el último apartado de la resolución<sup>10</sup>, el Tribunal Colegiado hace referencia al alegato de violación de los numerales 2, 7, 8, 22 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, explicando que los conceptos de violación formulados al respecto son infundados por lo siguiente:
  - i) Primero, respecto al artículo 2 de la Convención, señala que tiene que ver con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, cuando el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el numeral 1 de la propia convención no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, por lo que considera que tal disposición va dirigida a los órganos de los Estados encargados de la creación de las leyes, lo cual no vincula a la autoridad responsable ordenadora con alguna obligación que deba cumplir para no transgredir un derecho humano del quejoso.
  - j) Segundo, en lo relativo al artículo 7 de la Convención, que protege el derecho a la libertad personal, si bien le fue restringida, obedeció a la comisión del delito explicado en tal sentencia, de acuerdo con la Constitución y la legislación aplicable.
  - k) Tercero, respecto al numeral 8 del citado tratado internacional, remite al estudio de las formalidades esenciales del procedimiento y determina que se respetó tal derecho fundamental, de la misma manera que el precepto 25 pues se dio acceso a un recurso de apelación e incluso al juicio de amparo para estudiar la constitucionalidad de la determinación condenatoria.
  - l) Finalmente, en relación con el artículo 22 de la Convención Americana, se afirma que resulta inatendible su argumento, dado que

---

<sup>10</sup> Páginas 90 a 95 de la sentencia de amparo recurrida, visible a fojas 158-160 del cuaderno de amparo directo \*\*\*\*\*.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

ese precepto se relaciona con el derecho de circulación de residencia de las personas dentro del territorio de los Estados y ello no se vincula con los derechos restringidos con la emisión del acto reclamado, específicamente el de la libertad personal.

**25. Recurso de revisión.** En dos apartados de agravio, el recurrente planteó en esencia los razonamientos que se sintetizan a continuación:

- a) En un primer grupo de argumentos, sostiene que el Ministerio Público del Estado de México no debió calificar de legal la detención, tramitar la puesta a disposición ni practicar ninguna otra diligencia, pues los hechos atribuidos no eran de su competencia. Al respecto, señala que el precepto 474, párrafo primero, de la Ley General de Salud, prevé como regla de competencia general en favor de las autoridades del fuero común y por excepción el Ministerio Público de la Federación está facultado para solicitar la remisión de la investigación que inició en materia de narcomenudeo.
- b) Por tal motivo, considera que el representante social de la federación no era competente para consignar la averiguación previa por el delito contra la salud, ya que la cantidad de narcótico asegurado era inferior a la de cinco gramos multiplicados por mil a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siendo aplicable la ley local respectiva; además de que nunca solicitó a su homólogo local la remisión de la investigación que inició por materia de narcomenudeo, lo cual es exigible para que proceda la competencia excepcional a favor del fuero Federal, resultando competente el Ministerio Público Local.
- c) Por otra parte, argumenta que la autoridad responsable citó artículos erróneos al señalar que “las diligencias de la Policía Judicial y las practicadas por los tribunales del orden común que pasen al conocimiento de los federales, no se repetirán para que estos tengan validez”, dado que en ningún momento intervino la policía judicial dentro del sumario sino en todo caso el Ministerio Público Local

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

- d) En esa línea argumentativa, sostiene que el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales tampoco debió conocer del delito contra la salud, pues en todo caso le correspondía a un Juez del fuero común. Con base en lo anterior, aunado al principio de mayor beneficio, solicita que se le absuelva por el delito contra la salud al carecer de competencia el Juez de Distrito.
- e) En un segundo segmento de argumentos, asevera que la resolución de amparo le causa agravio al efectuar una interpretación inconstitucional de la detención, insistiendo en que la detención fue ilegal y que vulneró sus derechos establecidos en el artículo 14, 16 y 20 de la Constitución Federal.
- f) En este sentido, asevera que fue inconstitucional la convalidación del órgano investigador federal, ya que las pruebas obtenidas eran ilegales por que los policías revisaron el vehículo sin tener mandamiento legal para hacerlo.
- g) Expone su conceptualización del derecho humano a la libertad personal y la deambulatoria, previsto por la Constitución Federal, señalando que se vulneró en su perjuicio durante la detención, así como su derecho al debido proceso pues lo aseguraron sin informarle la razón por la cual lo detuvieron.
- h) Sostiene que es errónea la interpretación del Tribunal Colegiado del artículo 254 del Código Procesal Penal en la entidad, pues a la luz de los preceptos 14 y 16 constitucionales, si la detención inicial del vehículo fue porque venía a exceso de velocidad, eso de ninguna manera facultaba a los policías para revisar el automóvil ya que el ministerio público o la policía sólo pueden realizar inspección cuando haya motivos suficientes para presumir que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito que se investiga.
- i) Al respecto, considera que resulta contra intuitivo que policías estatales –que no son de tránsito– detuvieran el vehículo por ir a exceso de velocidad y si lo que motivó la detención fue tal violación

## **AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014**

de tránsito, ello por sí solo no puede levantar sospechas para revisar el vehículo y entonces encontrar estupefacientes y una granada de fragmentación. Por lo anterior, alega que no hubo flagrancia, siendo errónea la interpretación que el Tribunal Colegiado hizo al respecto.

- j) Asimismo, explica que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no son elementos de tránsito para poder marcar el alto a los vehículos, por lo que se extralimitaron en sus funciones; pues no tenían atribuciones para detener al vehículo “taxi” ni para revisarlo o para registrar a las personas que se encontraban en su interior.
- k) En virtud de lo anterior, sostiene que el Tribunal Colegiado soslayó que su derecho constitucional y convencional a la libertad deambulatoria y personal fue violentado al haber sido revisado ilegalmente, dado que el ministerio público o la policía sólo pueden registrar un vehículo cuando haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta dentro del mismo objetos relacionados con el delito, en términos del artículo 256 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de México.
- l) Así, por las razones expuestas, concluye que se vulneran en su perjuicio los preceptos 1º, 11, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2, 8, 21 y 25 de la Convención Americana.

## **VII. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO**

- 26. De conformidad con la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Federal y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo de toda revisión en amparo directo.
- 27. En ese sentido, tras un análisis de la demanda de amparo, la sentencia del Tribunal Colegiado y el recurso de revisión, se considera que el presente asunto satisface los requisitos de procedencia a los que hace alusión los

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como conforme al Punto Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.

28. De acuerdo con las normas constitucionales y legales citadas en el párrafo 22, este Tribunal Constitucional sólo puede conocer de la revisión de la sentencia de un juicio de amparo directo cuando, además de acreditarse la oportunidad del recurso y la legitimación del promovente, se cumplan los siguientes requisitos: a) que esté de por medio una cuestión constitucional para la resolución del caso concreto y b) su estudio por parte de esta Suprema Corte fije un criterio de importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico.
29. En relación con el primer requisito, con base en lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 21/2011-PL, fallada el nueve de septiembre de dos mil trece, esta Primera Sala entiende que una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando se exige la tutela del principio de supremacía constitucional para la solución de un caso concreto, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la determinación normativa que para ese supuesto otorga la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo o de alguna norma fundamental o de un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por México, mediante el despliegue de un método interpretativo.
30. Ello, pues el Tribunal Pleno sostuvo que como consecuencia de la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal, el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos.

31. Por ende, una cuestión de constitucionalidad se puede definir, en términos generales, mediante un criterio positivo y otro negativo. De manera positiva, se origina por el ejercicio interpretativo de un elemento o norma constitucional para la resolución del caso, entendiendo con ello no sólo la interpretación de los preceptos de la Constitución Federal, sino de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º, párrafo primero, de la propia Constitución Federal.
32. Por su parte, el criterio negativo radica en la identificación de su opuesto: la cuestión de legalidad. En efecto, aquellas cuestiones jurídicas atinentes exclusivamente a determinar *la debida aplicación de una ley* o la determinación del sentido de una norma infra constitucional, se encuadra como una cuestión de legalidad en la que lo relevante es desentrañar el sentido normativo de tales fuentes normativas.
33. Lo precedente no implica que una cuestión de legalidad esté desvinculada de la fuerza protectora de la norma fundamental, pues la Constitución Federal, en sus artículos 14 y 16, establece el derecho humano a la legalidad, lo cual conlleva evaluar la debida aplicación de la ley; sin embargo, ello se trata de una violación “indirecta” a la Constitución que no exige el ejercicio interpretativo de un elemento genuinamente constitucional, sino sólo una referencia en vía de consecuencia.
34. Por lo tanto, para que se actualice una cuestión de constitucionalidad para efectos de la procedencia de un recurso de revisión en un juicio de amparo directo, es necesario que en la sentencia recurrida se haya realizado un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de normas generales o se establezca la interpretación directa de una norma constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o que, habiéndose planteado alguna de esas

cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio en la respectiva sentencia.

35. Estas consideraciones quedaron plasmadas en la tesis P./J. 22/2014, de rubro: **“CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO”**<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Tesis P./J. 22/2014 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, tomo I, página 94, de texto: “Mediante la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el Poder Constituyente Permanente, además de modificar el catálogo formal de derechos que pueden ser protegidos mediante los medios de control de constitucionalidad, buscó introducir al texto constitucional el concepto de derechos humanos con toda su carga normativa, siendo una de sus implicaciones la revisión del estándar jurídico que determina la existencia de una cuestión de constitucionalidad, a la cual se hace referencia en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como elemento que actualiza la procedencia excepcional del recurso de revisión en el amparo directo. Así las cosas, según se desprende de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando de por medio se exija la tutela del principio de supremacía constitucional, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la solución normativa otorgada por la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo de dicha norma fundamental mediante el despliegue de un método interpretativo. Así, de un análisis sistemático de la jurisprudencia, se desprende que el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos. Sobre estas bases, cuando se alega una confrontación entre una ley secundaria y una norma de un tratado internacional que no regule un derecho humano, la confronta de estas normas secundarias es, en principio, una cuestión de legalidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, debido a que, en el fondo, lo que se alega es una “debida aplicación de la ley” a la luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. En ese aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes secundarias y, por ende, la solución de su conflicto normativo o antinomia corresponde a una cuestión de legalidad: determinar la forma en que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado internacional. Al no concurrir la exigencia de un desarrollo interpretativo de un elemento constitucional, no existe una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de revisión en amparo directo debe declararse improcedente. No obstante, cuando la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria implique la interpretación de una disposición normativa de una convención que, prima facie, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente constitucional, toda vez que cuando se estima que una ley viola un derecho humano reconocido en una convención subyace un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea de coherencia normativa. Lo mismo debe decirse cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su vez fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano. Consecuentemente, el escrutinio no se agota en la constatación de la consistencia de las normas entre sí -los criterios relacionales de creación

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

36. Por lo que hace al segundo requisito, aun cuando exista una cuestión de constitucionalidad, la procedencia del recurso se supedita constitucionalmente a que se fije un criterio de importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales que emita el Tribunal Pleno.
37. Sobre este último aspecto, debe entonces atenderse a lo que se precisa en la fracción II del punto Primero del Acuerdo Número 5/1999 antes citado, en virtud del cual, por regla general, se entiende que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre la cuestión de constitucionalidad hecha valer en la demanda de amparo, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes (y no haya que suplir la deficiencia de la queja); o bien, en casos análogos.
38. Finalmente, cabe mencionar que aunado a lo explicado anteriormente, esta Suprema Corte ha aceptado de manera excepcional la procedencia del recurso de revisión en un juicio de amparo directo cuando se impugnen disposiciones de la Ley de Amparo a través de este recurso. Derivado de lo resuelto en el recurso de reclamación 130/2011 y el amparo directo en revisión 301/2013, fallados respectivamente por el Tribunal Pleno y la Primera Sala el veintiséis de enero de dos mil doce y el tres de abril de dos mil trece, se ha concluido que procede la revisión en amparo directo cuando se combata las disposiciones de la propia Ley de Amparo y se satisfagan los tres requisitos siguientes: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) se haya impugnado ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada, y c) la concurrencia de un recurso contra tal acto, en donde pueda analizarse tanto

---

de normas-, sino en verificar la coherencia del orden constitucional como una unidad dotada de sentido protector o promocional de los derechos humanos, el cual se remite a argumentos sustanciales y no a razonamientos de índole formal. En ese sentido, es viable el recurso de revisión en el amparo directo, siempre que se cumplan las condiciones necesarias de procedencia, como es la exigencia técnica de desplegar un método interpretativo del referido derecho humano; es decir, el presente criterio no implica suprimir los requisitos técnicos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, requeridos por la Ley de Amparo y la jurisprudencia de esta Suprema Corte, pues ese supuesto se inserta en los criterios procesales ordinarios”.

la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada<sup>12</sup>.

39. Ahora bien, aplicando los referidos criterios de esta Suprema Corte al caso que nos ocupa, esta Primera Sala considera que resulta procedente el recurso de revisión. En primer lugar, el quejoso planteó en su demanda de amparo el ejercicio interpretativo de los preceptos 11 y 16 de la Constitución Federal y 2, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en diversos apartados del escrito inicial se puede advertir que no sólo adujo su violación, sino que el recurrente expuso una conceptualización propia del alcance y sentido de los derechos a la libertad personal y a lo que denominó como libertad deambulatoria, que por sí solos acreditan el supuesto de una interpretación directa de una cuestión constitucional.

40. Al respecto, a lo largo de su demanda de amparo, el quejoso fue insistente en argumentar que sin aceptar que hubiere poseído el arma y el narcótico

---

<sup>12</sup> Véase, la tesis 1a. CCXLI/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 745, de rubro y texto (negritas nuestras): **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA IMPUGNAR DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO A TRAVÉS DE ESTE RECURSO.** De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que: a) en la sentencia recurrida se realice un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, un tratado internacional o algún reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o habiéndose planteado, se omita su estudio y b) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el Pleno de ésta, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, el 26 de enero de 2012, estableció que es susceptible de actualizarse la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo cuando se cuestione la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, pues a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional, se ha desvanecido el obstáculo técnico que impedía conocer sobre su regularidad constitucional. Este planteamiento debe formularse en los recursos previstos en el juicio constitucional, ya que no es dable señalar como acto reclamado destacado en la demanda a la Ley de Amparo, ya que es hasta que se genere un acto de aplicación en perjuicio del particular cuando lo puede combatir. Así, en dichos casos, el órgano revisor no sólo se debe limitar a evaluar la regularidad de la decisión recurrida, sino también puede inaplicar la norma que sirvió de sustento cuando sea violatoria de algún derecho humano. Así, esta Primera Sala concluye, sobre la premisa de que el control constitucional es un elemento transversal a toda función jurisdiccional, que el recurso de revisión procede no sólo cuando exista una cuestión de constitucionalidad vinculada con la litis original, sino también cuando se combata la Ley de Amparo y se satisfagan los tres requisitos siguientes: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) la impugnación de ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada; y, c) la existencia de un recurso contra tal acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada”.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

que supuestamente se encontraron al interior del vehículo, la conducta de los elementos de seguridad ciudadana que lo aprehendieron careció de todo fundamento constitucional, pues no se justificó bajo una razón válida la restricción temporal de la circulación del automóvil ni tampoco el registro corporal o la revisión del interior del vehículo, violando con ello la libertad personal, la libre circulación y el contenido del artículo 16 constitucional.

41. Para una mayor claridad, se transcribe a continuación un apartado de la demanda en donde se puede identificar la petición de interpretación constitucional del quejoso:

[...] es menester precisar en primer término que la libertad es una facultad natural que tiene el hombre de obrar de una u otra manera y también de no obrar y se traduce en la ausencia de sujeción o subordinación que permita hacer todo cuando no se oponga a las leyes la autodeterminación de la propia voluntad de la persona de una conducta ilícita CONCLUYENDO DE ESTA MANERA que la libertad personal se traduce ene (sic) el derecho de la persona en cuando a hacer corporalmente ya que cubre exclusivamente comportamientos corporales materiales que presuponen la presencia física del titular de ese derecho porque se expresa normalmente en movimientos físicos a la protección de derecho en la libertad personal que circunscriben a la física y a lo tangible, por lo tanto todas las personas tienen esa libertad persona, libertad que se encuentra garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en este caso, en la libertad deambulatoria ya que el artículo 11 de nuestra carta magna establece: [se transcribe].

Por lo tanto de esto se colige que toda persona tiene esa libertad personal de deambulación y solamente la ley prevé esos casos en que puede restringirse esa libertad como lo prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que a la letra dice: [se transcribe].

Luego entonces se debe considerar que para afectar esa libertad personal de las personas o individuos debe de existir un mandamiento de autoridad.

42. Por lo que hace a estos argumentos, el Tribunal Colegiado les dio una respuesta frontal y sostuvo, en principio, que no era aplicable el artículo 11 de la Constitución Federal y que, en relación con las circunstancias en las que se dio la aprehensión del quejoso, si bien la detención propiamente dicha se dio hasta la actualización de la flagrancia de los referidos delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la orden al conductor por parte de las autoridades para que detuviera el vehículo, el registro corporal y la revisión del automóvil, se llevó

a cabo en prevención de la ejecución o consumación de un acto ilícito, la preservación de la paz social y la seguridad pública con fundamento en los artículos 2 y 136 de la Ley de Seguridad del Estado de México.

43. Para apuntar esta conclusión, en el último apartado de la sentencia, el órgano colegiado afirmó que tampoco se habían transgredido los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las mismas razones que se dieron en el fallo al hacerse el análisis de la alegada violación de los derechos al debido proceso, acceso a la justicia y a la libertad personal de fuente constitucional; asimismo, aclaró que los artículos 2 y 22 del citado tratado internacional no eran aplicables, pues el primero se refería a las obligaciones de los órganos creadores de leyes y el segundo regulaba el derecho a la libre circulación, el cual no se vincula con el caso concreto. El texto relevante de la resolución es el que sigue<sup>13</sup>:

[...] En efecto, en cuanto al punto referente a la forma en que fue detenido el quejoso por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de quienes considera injustificada e ilegal su intervención, se advierte que la autoridad responsable actuó legalmente al señalar que en ese rubro su actuación debía ceñirse a lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, que regula entre otros aspectos, las detenciones por flagrancia, como excepción a aquella en la que debe preceder orden de autoridad judicial, de ahí que sea inatendible el argumento del impetrante en cuanto a la violación que aduce al diverso numeral 11 de la Carta Magna.

Asimismo, es infundado que la intervención de los elementos aprehensores haya sido contraria a la legalidad y al mandato constitucional, toda vez que como lo indicó el tribunal unitario responsable, en principio, estaba justificada su actuación antes de que realizaran la detención por flagrancia y posterior aseguramiento de las personas, del narcótico y del artefacto bélico que pusieron a disposición del agente del Ministerio Público Investigador.

En efecto, de acuerdo con el oficio de puesta a disposición se aprecia que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron el vehículo tipo taxi en el que circulaban dos sujetos del sexo masculino, al percatarse que era conducido desde su perspectiva a exceso de velocidad, sobre la vialidad Paseo Tollocán, de orienta a poniente, hacia el centro de Toluca, aproximadamente a trescientos metros del cruce con la avenida Comonford, incluso refieren que estuvo a punto de investir a unos peatones que se encontraban cerca del

---

<sup>13</sup> Páginas 43 a 48 y 90 a 92 de la sentencia de amparo. Véase, hojas 56 a 109 del cuaderno del juicio de amparo \*\*\*\*\*.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

lugar; siendo esa circunstancia la que alertó a los remitentes para ordenar al conductor del vehículo que detuviera su marcha, para luego proceder a practicar una revisión tanto a los tripulantes como al propio vehículo donde finalmente fue encontrada una granada de fragmentación y una bolsa de plástico negra que contenía hierba verde y seca, al parecer marihuana.

En ese sentido, si bien es cierto que el conducir en esos términos no constituía por sí la comisión de un delito, también lo es que ello no impedía que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana actuaran en prevención de la ejecución o consumación de un acto ilícito, preservando la paz social y la seguridad pública, al impedir que el conductor de dicho automotor continuara conduciendo de esa forma, con el fin de evitar que pudiera ocasionar lesiones a personas o daños a bienes muebles o inmuebles; y hasta ese momento, la detención de la marcha del automotor, no constituía una detención formal por flagrancia en la comisión de un hecho posiblemente constitutivo de delito, sino que esto ocurrió a virtud de que en el interior del vehículo se encontraba una granada de fragmentación y hierba verde y seca con las características de la marihuana, por lo que al estar a la inmediata disposición de los tripulantes se configuró el supuesto de flagrancia en la detención formal realizada por los elementos aprehensores quienes pusieron a disposición de la autoridad ministerial respectiva a los sujetos asegurados, así como el artefacto bélico, la bolsa de plástico color negro con la hierba en cita y el vehículo relacionado con los hechos.

Así, la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ajustó a lo dispuesto en los numerales 2 y 136 de la Ley de Seguridad del Estado de México, en relación con el artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que señalan en lo que interesa:

De la Ley de Seguridad del Estado de México:

‘Artículo 2.- [Se transcribe]’.

‘Artículo 136.- [Se transcribe]’.

Del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

‘Artículo 8. [Se transcribe]’.

En mérito de lo anterior, los hallazgos producto de la revisión del vehículo relacionado con los hechos, consistentes en un artefacto bélico y una bolsa negra que contenía hierba verde y seca, que al analizarla químicamente resultó ser marihuana, no derivan de una actuación ilegal por parte de los elementos aprehensores, de ahí que por esa razón, no pueda declararse inválida la intervención de dichos servidores públicos y lo que derivó de la misma, específicamente la localización de los objetos encontrados en el interior del automotor.”

[...]

En ese contexto, al resultar infundados los diversos conceptos de violación esgrimidos por el quejoso y que fueron analizados en esta ejecutoria, la misma suerte siguen la vulneración que aduce de los numerales 2, 7, 8, 22 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se hace depender de las actuaciones que tildó de ilegales dentro del proceso penal instaurado en su contra.

No obstante, al margen de los únicos aspectos que abordó el quejoso con relación a la transgresión de dichos preceptos de la citada convención, este tribunal al realizar un análisis general de los mismos, frente al acto reclamado, no advierte que se hubiesen afectado

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

derechos humanos del impetrante, que se encuentren reconocidos en ellos.

En efecto, en lo que respecta al artículo 2 de la Convención Americana, tiene que ver con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, cuando el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el numeral 1 de la propia convención, no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter de los Estados parte; disposición que va dirigida a los órganos de los Estados encargados de la creación de las leyes, lo cual no vincula a la autoridad responsable ordenadora con alguna obligación que deba cumplir para no transgredir un derecho humano del quejoso, ya que solo actúa como aplicadora e intérprete de la norma.

Por lo que se refiere al artículo 7 de la convención que se relaciona con el derecho a la libertad personal, si bien le fue restringida, obedeció a causas y condiciones fijadas de antemano por la Constitución y la legislación aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo ya expuesto en esta ejecutoria.

Asimismo, le fueron respetadas al quejoso todas sus garantías judiciales a que alude el numeral 8 de la convención, las cuales tienen que ver con los aspectos que ya fueron abordados al momento de analizar los requisitos de carácter procesal que deben ser respetados previo a la emisión de la sentencia definitiva reclamada (formalidades esenciales del procedimiento).

En cuanto a lo regulado por el artículo 22 de la convención, resulta inatendible en el caso particular, porque al igual que se estableció con anterioridad con relación a lo que estatuye el numeral 11 de la Constitución Federal, se relaciona con el derecho de circulación y de residencia de las personas dentro del territorio de los Estados, lo cual no se vincula con los derechos que fueron restringidos con la emisión del acto reclamado, específicamente el de la libertad personal.

Finalmente, el quejoso tuvo acceso a la protección judicial conforme al artículo 25 de la convención, no solo a través del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia condenatoria de primera instancia, sino al substanciarse y resolverse el presente juicio de amparo por medio del cual se analizó la constitucionalidad del acto reclamado. [...].

44. Con base en lo anterior, a juicio de esta Primera Sala, se estima que los razonamientos vertidos por el Tribunal Colegiado caen dentro del supuesto a los que este Tribunal Constitucional ha denominado interpretación directa de un derecho humano o un elemento constitucional.

45. Primero, debido a que el órgano colegiado, aún sin citar el artículo 16 constitucional, le dio un alcance autónomo y diferenciado al mismo, distinguiendo entre la figura de la detención y los actos previos a la misma que pudieran o no incidir en la esfera jurídica de una persona (tales como

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

un registro corporal o una revisión de un vehículo). De igual manera, otorgó un sentido determinado al derecho a la libertad personal y señaló expresamente que en el caso no resultaba viable el análisis constitucional del derecho a la libre circulación previsto en el artículo 11 de la Constitución Federal, pues a su decir en nada se vinculaba con el caso concreto, presuponiendo entonces un contenido de los derechos distinto al que fue planteado por el quejoso en la demanda de amparo<sup>14</sup>.

46. En segundo lugar, a pesar de que el estudio no fue exhaustivo, se advierte que el Tribunal Colegiado se pronunció también sobre el contenido de los numerales 2 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asignándoles un determinado sentido mediante un criterio de interpretación literal y sistemático, ello con el objetivo de demostrar que tampoco tenían algún tipo de relación con las violaciones aducidas por el quejoso.
47. Por lo tanto, se estima que se acredita el primer requisito de procedencia del recurso referido a la presencia de una cuestión constitucional, pues la interpretación directa de constitucionalidad fue solicitada en la demanda de amparo, el Tribunal Colegiado se pronunció sobre el sentido y alcance de diversos derechos humanos y normas constitucionales y convencionales y, además, estas conclusiones fueron objetadas a través del recurso de revisión (de manera deficiente, lo cual puede ser suplido en deficiencia de la queja)<sup>15</sup>, subsistiendo entonces el problema de constitucionalidad.

---

<sup>14</sup> Tiene aplicación la tesis 1a. CXI/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, octubre de 2005, página 704, de rubro y texto: **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO REALIZA UNA INTERPRETACIÓN DE MANERA IMPLÍCITA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADOPTANDO COMO PROPIA LA REALIZADA POR UNA DE LAS PARTES Y DESESTIMANDO LA DE LA CONTRARIA.** Por "interpretación directa" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo, no debe entenderse sólo aquella realizada expresamente al citarse y transcribirse el contenido de la norma constitucional a interpretar, sino también la interpretación efectuada de manera implícita al adoptar como propia la realizada por una de las partes en el juicio y desestimando la de la contraria, por considerarla errónea, incluso cuando no se cite ni se transcriba la norma constitucional, ni tampoco se expongan los motivos tomados en consideración para ello. Lo anterior es así, porque de lo contrario se dejaría al arbitrio del tribunal a quo la determinación de si realizó o no una interpretación directa de un precepto constitucional, pues bastaría que su resolución fuera dogmática, aun cuando ésta fuera contraria a alguna de las interpretaciones directas realizada por una de las partes, máxime si de esa interpretación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende la litis a resolver en el juicio de amparo”.

<sup>15</sup> Ver amparo directo en revisión 1603/2011, resuelto en sesión de cuatro de noviembre de dos mil once, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío. Así como el

48. Por lo que hace al segundo requisito material de procedencia, se tiene que el problema de constitucionalidad planteado entraña la posible fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, en virtud de que esta Primera Sala se tendrá que pronunciar sobre los artículos 11 y 16 de la Constitución Federal, en relación con diversos numerales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de establecer las condiciones de validez de los actos de autoridad previos a una detención por flagrancia, lo cual no ha sido ampliamente abordado por esta Suprema Corte.
49. Cabe destacar que esta Primera Sala ya se pronunció en el amparo directo en revisión 3463/2012, fallado el veintidós de enero de dos mil catorce, sobre la forma en que se deben de justificar los actos previos a una detención por flagrancia, estableciendo un estándar para calificar su viabilidad constitucional. No obstante, si bien ya existe un precedente, este recurso de revisión tiene como finalidad continuar progresivamente la determinación y aplicación de ese estándar a la luz de un nuevo caso concreto para constituir jurisprudencia.

### VIII. ESTUDIO DE FONDO

50. Esta Sala considera que los argumentos esgrimidos por el recurrente resultan, por una parte, **inoperantes** y, por la otra, **fundados**, ésta última calificativa no porque se considere que los actos llevados a cabo por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México para la detención del quejoso carecen de justificación constitucional, sino porque esta Primera Sala no coincide con la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado de los derechos humanos a la libertad personal y, en específico, a la libertad deambulatoria, así como de sus posibles restricciones. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones.

---

amparo directo 5/2012, resuelto en sesión seis de febrero de dos mil trece, por mayoría de tres votos, bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

51. En principio, debe destacarse que los razonamientos del quejoso pueden clasificarse en dos tipos de objeciones a la sentencia de amparo. La primera consistente en que tomando en cuenta lo resuelto por el Tribunal Colegiado respecto a la validez de las diligencias practicadas por el Ministerio Público del Fuero Común, si el delito que se le atribuyó contra la salud era de competencia local, entonces el representante social de la Federación que abordó la averiguación previa carecía de competencias para conocer de la misma y, por lo tanto, no podía haber llevado a cabo la consignación. La única forma para ser competente era que solicitara expresamente la remisión de la investigación, aspecto que no se actualizó en el caso concreto.
52. La segunda objeción a la resolución de amparo tiene como objeto los argumentos del Tribunal Colegiado para justificar los actos previos de autoridad que derivaron en la detención en flagrancia del quejoso. Como se señaló en el apartado anterior, en la demanda de amparo se alegó que la orden de detener la marcha del vehículo, el registro corporal de sus tripulantes y la revisión del interior del automóvil no se encontraban justificadas desde el punto de vista constitucional, por lo que las pruebas obtenidas con posterioridad debía declararse como nulas.
53. Al contestar a estos conceptos de violación, en términos generales, el órgano colegiado señaló que si bien tanto la referida orden de parar la circulación del taxi como los registros y revisiones no son propiamente una detención que se actualiza ante el supuesto de flagrancia, tales actuaciones de los elementos de seguridad tenía como intención la preservación de la paz social y la seguridad pública, impidiendo que el conductor del vehículo continuara circulando a exceso de velocidad, por lo que estaban justificadas y, por lo tanto, no afectaban la validez de la detención por flagrancia ante el descubrimiento de una conducta delictiva.
54. Ahora, en relación con los referidos agravios, esta Primera Sala califica como **inoperantes** los argumentos destinados a objetar la validez de las actuaciones del Ministerio Público de la Federación por razón de

competencia, pues están destinadas a combatir aspectos de la resolución del órgano colegiado que no guardan relación con cuestiones de constitucionalidad, sino de mera legalidad; es decir, se reclama la competencia de las autoridades participantes por razón de una supuesta aplicación errónea de una norma legal, lo cual no puede ser analizado en un recurso de revisión proveniente de un amparo directo. Cobra aplicación la tesis de rubro: **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ADUZCAN CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD”**<sup>16</sup>.

55. En cambio, respecto a los razonamientos del recurso de revisión destinados a contrariar la interpretación del Tribunal Colegiado sobre los derechos a la libertad personal; en particular, a la libertad deambulatoria y mediante los que se refutan los motivos para justificar constitucionalmente los actos previos de los elementos de seguridad ciudadana consistentes en el registro del quejoso y la revisión de sus posesiones, si bien los agravios son en su mayoría repeticiones de los conceptos de violación, suplidos en deficiencia de la queja con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se consideran suficientes para revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal Colegiado para que se pronuncie de conformidad con los lineamientos plasmados en la presente ejecutoria.

56. Lo anterior, se insiste, toda vez que esta Primera Sala no comparte la interpretación que realizó el órgano de amparo a los artículos 11 y 16 constitucionales, así como a los numerales 8 y 21 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos<sup>17</sup>. A fin de dar una explicación

---

<sup>16</sup> Tesis 1a./J. 56/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 730, de texto: “Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, relativos al recurso de revisión en amparo directo, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia el estudio de cuestiones propiamente constitucionales. Por tanto, si se plantean tanto agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de preceptos de la Constitución, como argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes”.

<sup>17</sup> Es importante resaltar que el Tribunal Colegiado se pronunció a su vez en la sentencia de amparo sobre el contenido del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “[s]i el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

exhaustiva sobre esta conclusión, en un primer momento se dará cuenta de los precedentes de esta Primera Sala aplicables al respecto, para después explicar de manera concreta por qué no se coincide con la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado.

I

57. Esta Suprema Corte ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el derecho a la libertad personal y los requisitos y lineamientos para sus posibles restricciones, ya sea desde restricciones provisionales hasta privaciones de la libertad como una posible detención.
58. Entre una gran variedad de precedentes, se tiene que en el amparo directo en revisión 703/2012, fallado en sesión de seis de noviembre de dos mil trece, esta Primera Sala sostuvo que el derecho a la libertad *“comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás, ni entrañen abuso de los propios”*.
59. Por ende, este principio de libertad es un derecho humano de reconocimiento y protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal, que en su ámbito más básico es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Tal como esta Suprema Corte lo adelantó en la nota al pie 167 del amparo directo 14/2011, resuelto el nueve de noviembre de dos mil once, el régimen general de libertades a favor de la persona que consagra el artículo 16 constitucional, incluye el de la libertad personal que es una

---

*estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”*. Si bien señaló que esta norma tiene como destinatarios únicamente a los órganos creadores de leyes y no a sus aplicadores, lo cual admite varias matizaciones y alcances, esta Suprema Corte estima prudente no pronunciarse al respecto, al ser innecesario para la resolución del caso que nos ocupa.

categoría específica equivalente a la libertad de movimiento o deambulatoria.

60. En ese tenor, se tiene que en el ordenamiento constitucional mexicano, el derecho a la libertad personal se reconoce a partir de muy diversas normas como los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Federal<sup>18</sup>; 2, 4 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>19</sup>; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>20</sup>; I y XXV de la Declaración Americana de los

---

<sup>18</sup> “Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. [...]”.

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [...]”.

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

<sup>19</sup> “Artículo 2

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

“Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.

“Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

<sup>20</sup> “Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

Derechos y Deberes del Hombre<sup>21</sup>, y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos<sup>22</sup>.

61. Por consiguiente, como se puede advertir de las transcripciones de estos artículos, el derecho a la libertad personal es reconocido como de primer rango y sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia<sup>23</sup>, de manera que se salvaguarde su reconocimiento y protección de la manera más amplia, precisamente, bajo el principio pro persona.

---

<sup>21</sup> “Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona

Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

“Derecho de protección contra la detención arbitraria

Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.

<sup>22</sup> “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”.

<sup>23</sup> Tiene aplicación la tesis 1a. CXCIX/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6. Mayo de 2014, tomo I, página 547, de rubro y texto: **“LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL**. La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional”.

62. Asimismo, este derecho, al expresarse en distintas facetas, como puede ser la penal, converge con diversos principios fundamentales como es la legalidad y la seguridad jurídica conforme a los citados artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, así como con otros derechos humanos dada su inminente interrelación e interdependencia, tales como el derecho de propiedad o el derecho a la libre circulación previsto en el artículo 11 constitucional<sup>24</sup>, que si bien se refiere en términos generales a la posibilidad de entrar y trasladarse en el interior del territorio nacional, una afectación o privación a la libertad personal en su expresión de libertad de movimiento podría incidir indirectamente en el goce de tal libre circulación.
63. Bajo esta línea argumentativa, restringiéndose al ámbito penal, esta Primera Sala ha sostenido que para la privación de la libertad personal deben de concurrir una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de aprehensión, un caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público o la actualización de un supuesto de flagrancia delictiva.
64. En el citado amparo directo 14/2011 y en el amparo directo en revisión 2470/2011, resuelto el dieciocho de enero de dos mil once, se insiste, esta Sala argumentó que el artículo 16 constitucional prevé un régimen general de libertades, entre las que se encuentra la libertad personal. Al respecto, se dijo que la *“estructura de este precepto constitucional se traduce en dos distintas formas de proteger los derechos: los dos primeros párrafos de dicho artículo los consagran positivamente, y los párrafos subsecuentes señalan las posibles restricciones a las mismas; es decir, en qué supuestos el Estado puede generar afectaciones válidas a este derecho y bajo qué condiciones”*.

---

<sup>24</sup> “Artículo 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

65. Por lo tanto, en materia de libertad personal, el Estado no puede limitar el goce de ese derecho salvo por los supuestos expresamente establecidos en el texto constitucional (orden de aprehensión, las detenciones en flagrancia y caso urgente) y conforme a cierto tipo de formalidades, lo que se apuntala con el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone que nadie puede ser privado de la libertad salvo por las causas y condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o las leyes dictadas conforme a ellas.
66. Uno de esos supuestos previamente regulados es el de flagrancia, causa que se actualizó en el caso concreto para la detención del quejoso. Lo flagrante es aquello que brilla a todas luces, que es evidente e inconfundible. Por ende, la concurrencia de una conducta delictiva flagrante es una condición que se configura antes de la detención, lo que implica que la autoridad no tiene facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo o porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito objeto de investigación si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial, ni tampoco se puede detener con la intención de investigar.
67. Si la persona no es sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de ello, no es admisible que la autoridad aprehensora detenga al inculpado y después intente justificar esa acción bajo el argumento de que la persona fue detenida mientras cometía el delito.
68. Consecuentemente, una “actitud sospechosa”, nerviosa o a cualquier otro motivo relacionado con la apariencia de una persona, como se dice en el amparo directo en revisión 2470/2011, no es una causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto flagrancia, ya que éste siempre debe tener implícito un elemento sorpresa tanto para los particulares que son testigos, como para la autoridad aprehensora. En contraste, cuando no

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

haya ese elemento sorpresa –porque ya se ha iniciado una investigación que arroja datos sobre la probable responsabilidad de una persona– la detención requerirá estar precedida por el dictado de una orden de aprehensión.

69. Congruente con estas premisas, esta Primera Sala enfatizó en las citadas ejecutorias que, para que la detención en flagrancia pudiera ser válida, tendría que darse alguno de los siguientes supuestos: a) la aprehensión del aparente autor del delito si se observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, y b) se puede iniciar la persecución del aparente autor del delito para aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado.
70. Sin embargo, al margen de los referidos supuestos de justificación de la privación de la libertad personal como la orden de aprehensión, el caso de urgencia y la flagrancia, esta Suprema Corte ha determinado que pueden existir otro tipo de afectaciones momentáneas a esta libertad que no caen dentro de dichas categorías conceptuales y que deben de cumplir con otros parámetros para validar su constitucionalidad.
71. A este tipo de situaciones se les puede denominar como restricciones provisionales al ejercicio de un derecho, las cuales no deben de ser confundidas, por ejemplo, con una detención propiamente dicha, ya que no implican una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por la autoridad y que en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública.
72. En el citado amparo directo en revisión 3463/2012, esta Primera Sala explicó qué debe entenderse como restricción provisional válida a la libertad

personal de manera previa a la existencia de una detención en flagrancia. El texto es el que sigue:

No obstante la delimitación anterior, en el presente caso el recurrente plantea una problemática jurídica que requiere de un análisis de constitucionalidad que es previo a la determinación de la legal detención en flagrancia. En decir, cuáles son las condiciones que justifican un acto de molestia para el gobernado, con motivo de un señalamiento por denuncia informal de que la persona está cometiendo un delito, el cual no objetivamente visible, sino que es descubierto con motivo del acercamiento que tiene la policía hacia el individuo. Así como aquellos casos, en los que el propio comportamiento del individuo de lugar a configurar una sospecha razonada de que está cometiendo un ilícito penal.

En este contexto, a partir del planteamiento del recurrente, se considera importante precisar qué debe entenderse por una **sospecha razonada** y cómo es que la existencia de la misma pueda justificar un **control preventivo provisional** por parte de la autoridad policial. Para ello, resulta necesario precisar los parámetros constitucionales bajo los cuales deben llevarse a cabo dichos controles, para posiblemente realizar detenciones por delitos cometidos en flagrancia.

En principio, debe establecerse que la finalidad de estos controles no es encontrar pruebas de la comisión de alguna conducta delictiva en particular, sino que se realizan con el objetivo de prevenir algún posible delito, de salvaguardar la integridad y la vida de los agentes de la policía, o bien, para corroborar la identidad de alguna persona con base a información de delitos previamente denunciados ante la policía o una autoridad.

Lo cual excluye la posibilidad de que una autoridad pueda detener a una persona, sin una causa razonable mínima que lo justifique, como cuando objetivamente se aprecia que se está cometiendo un delito y se pretende ocultar su realización. Pues de otra manera, como se ha precisado, se justificaría que por cualquier circunstancia abstracta, como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse, pueda ser detenido y sujeto a revisión, cuando no es evidente desde una óptica objetiva que existen circunstancias que permitan justificar la precitada sospecha de que se está cometiendo un delito. Lo cual de acontecer sería notoriamente un acto inconstitucional. De manera que para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no una simple sospecha que derive del criterio subjetivo del agente de la autoridad, basado en la presunción de que por la simple apariencia del sujeto es posible que sea un delincuente.

Ahora bien, regresemos al cuestionamiento del recurrente. Esta Primera Sala determina que la realización de un control preventivo provisional debe ser motivado inicialmente por la **sospecha razonable** de los agentes, lo cual debe ser acreditable empíricamente en virtud de que se justifique la presunción de que alguien está cometiendo un delito o lo acaba de cometer. Dichas circunstancias deben coincidir objetivamente con los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas o testigos de algún delito en las denuncias que haya recibido la policía previamente.

Del planteamiento del recurrente, se cuestiona la detención que precede de la clase de denuncias informales que versan sobre delitos cometidos en flagrancia (es decir, aquellos que se están cometiendo o bien se acaban de cometer). En otras palabras, lo referente a todas aquellas denuncias que no se rinden ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente. Esto, por la urgencia implícita al concepto de flagrancia. Como ejemplos de denuncias informales tenemos: llamadas a la policía (anónimas o no) de particulares que son víctimas o testigos del delito; o aquellas denuncias de testigos o víctimas que se realizan directa y presencialmente ante la policía y que también versan sobre hechos delictivos recién cometidos o que se están cometiendo.

Asimismo, es importante considerar que el comportamiento inusual de las personas, como las conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía, así como cualquier otro comportamiento que **razonablemente** pueda ser interpretado dentro de determinado contexto como preparatorio para la comisión de algún delito, puede justificar un control preventivo provisional. Únicamente bajo estas condiciones, la policía estaría en posibilidad de llevar a cabo un control preventivo provisional.

Así, los parámetros que dan pauta a la detención por sospecha razonable, derivan de condiciones específicas que distan de aquellos casos en que la detención de una persona se realiza por un agente de la autoridad en virtud de haber presenciado que se estaba cometiendo el delito. En la actualización de la sospecha razonada, no existen la condición fáctica descrita, la comisión del delito no es evidente y apreciable de forma directa, pero existen condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad. Ya sea porque exista una denuncia informal o anónima o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Pero serán las condiciones fácticas de estas circunstancias las que determinan el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad.

Una vez agotado ese requisito, deberá considerarse el grado de intensidad de la conducta de la que deriva la sospecha razonable para determinar **el control preventivo**, siendo éstos directamente proporcionales. En ese tenor, existen dos grados:

Un control preventivo de **grado menor** implicaría que los agentes de la policía pudiesen limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, como por ejemplo su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. Asimismo, el agente de la policía estaría en posibilidad de realizar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo.

Un control preventivo de **grado superior**, motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, implicaría que los agentes policiales estarían en la posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad fundamental de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En estas condiciones, dichos agentes podrían además registrar las ropas de las personas,

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Esto ocurriría, por ejemplo, si las circunstancias objetivas y particulares que rodean a un delito y al sujeto activo corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de autoridad. En resumen, una persona violenta o que intente darse a la fuga, puede ser objeto de un control preventivo más intenso<sup>25</sup>.

73. Como se desprende de la transcripción, esta Primera Sala ideó un concepto jurídico que denominó “control preventivo provisional”, en el que abordó las distintas actuaciones legítimas de las autoridades que pudieran incidir en la libertad personal o propiedad de un individuo, como los actos ordinarios de los diferentes elementos de seguridad en la prevención e investigación de una conducta delictiva o las acciones necesarias para la salvaguarda de la integridad de los propios agentes policiales en el desahogo de sus competencias.
74. Esta determinación a la que llegó la Primera Sala tiene como premisas dos presupuestos de entendimiento constitucional de gran envergadura para el ordenamiento jurídico, que si bien no fueron destacados de manera expresa en el citado fallo, son los que dieron pie a que esta Suprema Corte aceptara la existencia de tal control preventivo provisional.
75. El primer presupuesto consiste en que la mayoría de los derechos humanos no son de carácter absoluto, ni siquiera la libertad personal, como reiteradamente lo ha sostenido esta Suprema Corte. Consecuentemente, aunque este control preventivo provisional no tiene un sustento expreso en el texto constitucional, deriva de las facultades que tiene los elementos de seguridad pública en la prevención, investigación y persecución de posibles conductas que afecten los derechos de los demás y, por ende, prohibidas por el ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Párrafos 107 a 118 de la sentencia del amparo directo en revisión 3463/2012.

<sup>26</sup> En el Caso Cabrera y Montiel vs. México, la Corte Interamericana estableció que: “(...) si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”. Cfr., Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 87. Ver también *Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de

76. La intención de esta Suprema Corte en destacar la existencia de dicho control preventivo provisional fue precisamente en clarificar cuáles son las restricciones provisionales permitidas al ejercicio de derechos humanos como la libertad personal y bajo qué condiciones se justifican, ya que invariablemente la conducta de un elemento de policía o de seguridad pública incidirá o afectará momentáneamente en esa libertad o libertades y en el goce de otros derechos interdependientes como puede ser el de propiedad, libre circulación o intimidad.
77. En estrecha relación con lo anterior, el segundo presupuesto de la citada sentencia radica en que se permite este control preventivo provisional al no ser un acto de privación del ejercicio de derechos, como puede ser una detención. Las restricciones provisionales son precisamente afectaciones momentáneas al ejercicio de un derecho que no es absoluto; por lo tanto, aun cuando no se encuentre prevista expresamente cierta restricción provisional en el texto constitucional, es legítima desde el punto de vista constitucional cuando se realice en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal y siempre y cuando se efectúe atendiendo al estándar de excepcionalidad y de concurrencia de una sospecha razonable.
78. En otras palabras, si bien todas las personas gozan de los derechos humanos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestado en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, entre otros, como cualquier otro derecho humano, el ejercicio de los mismos puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad al no ser absolutos.

---

noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 174; *Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 111, y *Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 86.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

79. En ese sentido, la Constitución Federal señala que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva. A este accionar el texto constitucional lo denomina como “detención”, que en realidad se puede considerar como un sinónimo de “arresto”. Como se mencionó, la detención ocurre cuando una autoridad o cualquier otra persona, ante la actualización de una conducta delictiva flagrante, ejerce las potestades conferidas constitucionalmente para privar a una persona de su libertad personal y deambulatoria (en algunos casos a través del uso de la fuerza), con el objetivo de ser presentado ante la autoridad correspondiente o ante el ministerio público.
80. Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede o debe catalogarse como una detención. Las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o de prevención del delito, por lo que necesariamente existe algún tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y los habitantes de este país que no actualiza el supuesto de detención.
81. Así, para efectos del control preventivo provisional y siguiendo la línea argumentativa del citado amparo directo en revisión 3463/2012, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o de prevención del delito; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en estricto sentido.
82. El primer nivel de contacto no requiere de justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica. Este supuesto se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace ciertos tipos de preguntas, sin ejercer ningún medio coactivo y bajo la suposición de que dicha persona se puede retirar en cualquier momento.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

83. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, lo cual puede derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción provisional debe ser excepcional y se admite únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones, de acuerdo a los lineamientos expuestos en el referido amparo directo en revisión 3463/2012.
84. Al respecto, esta restricción a la libertad personal tiene que estar plenamente justificada en aras de que se fundamente a partir del artículo 21 constitucional; es decir, en un Estado constitucional de Derecho como el mexicano, no es posible aceptar que cualquier autoridad pueda limitar el ejercicio, a saber, de la libertad deambulatoria, sin razones objetivas que sustenten tal afectación en el ejercicio del derecho.
85. Así, la restricción temporal a la libertad deambulatoria de una persona y sus derechos interdependientes puede justificarse, en algunos casos, en la actualización de infracciones administrativas (como podría ser la violación al reglamento de tránsito) o en la concurrencia, a juicio de la autoridad, de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva.
86. Adicionalmente, esta restricción provisional puede darse en un grado menor o mayor de intromisión, dependiendo de las circunstancias del caso, tal como se expuso en el amparo directo en revisión 3463/2012. Será mayor cuando la autoridad aprecie de las situaciones fácticas que, por ejemplo, su integridad física corre algún peligro al momento de restringir provisionalmente la libertad de un sujeto o que esta persona resulta violenta o intente darse a la fuga, lo cual lo facultará para realizar sobre la persona y/o sus posesiones o propiedades un registro o revisión más exhaustiva, con la finalidad fundamental de prevenir algún delito.

87. Por el contrario, la restricción provisional del ejercicio del derecho humano será menos intrusiva si actualizada la sospecha razonable, no existen circunstancias fácticas que permitan a la autoridad percibir que la persona en cuestión es peligrosa o que su integridad física corre peligro, por lo que estarán facultados para llevar a cabo solamente una revisión ocular superficial y exterior de la persona y/o de sus posesiones o propiedades.
88. Cabe recalcar que para acreditar la existencia de esta suposición razonable, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizada libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado de manera consciente y libre; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación<sup>27</sup> por parte de los agentes de policía<sup>28</sup>. Para el primer supuesto, dicha información tendrá que cumplir con criterios de razonabilidad y objetividad; a saber, deberá ser suficiente bajo el criterio de que cualquier persona desde un punto de vista objetivo hubiere llegado a la misma determinación que la autoridad si hubiere contado con tal información.
89. Lo anterior, será diferente en cada caso concreto y dependerá de los hechos y circunstancias presentes al momento de decidir efectuar la restricción temporal de la libertad personal y de otros derechos interdependientes. La sospecha razonable, se insiste, *“debe ser acreditable empíricamente en virtud de que se justifique la presunción de que alguien está cometiendo un delito o lo acaba de cometer. Dichas circunstancias deben coincidir objetivamente con los objetos materiales del ilícito, los*

<sup>27</sup> Véase, la interpretación del concepto de consentimiento plasmada en el amparo directo en revisión 2420/2011, página 28. Si bien es cierto deriva de un caso relacionado con la inviolabilidad del domicilio, dicha conceptualización parte de una interpretación del artículo 16, primer párrafo, constitucional y evidencia una preocupación de la Primera Sala de esta Suprema Corte por evitar todo posible acto de coacción a la voluntad libre de una persona.

<sup>28</sup> Es importante resaltar que una conducta evasiva a las peticiones de una autoridad no puede considerarse, *per se*, como una sospecha razonable que justifica un control preventivo provisional, dado que el hecho de que una persona invoque o haga valer su derecho a la propiedad o intimidad, entre otras libertades, no significa forzosamente que esté llevando a cabo una conducta ilícita, sino que está en posición de exigir el respeto a su respectivo derecho humano.

*sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas o testigos de algún delito en las denuncias que haya recibido la policía previamente*<sup>29</sup>.

90. Asimismo, *“[e]n la actualización de la sospecha razonada, no existen la condición fáctica descrita, la comisión del delito no es evidente y apreciable de forma directa, pero existen condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad”*<sup>30</sup>, por lo que *“serán las condiciones fácticas de estas circunstancias las que determinan el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad”*<sup>31</sup>.

91. Bajo esa tónica, es importante entonces resaltar que no deben confundirse los citados niveles de actuación de la autoridad de seguridad pública, pues habrá situaciones en que restricciones temporales a la libertad personal se conviertan en detenciones, al verificarse en el momento de la restricción la actualización de una conducta delictiva, mientras que en otros casos se agotará la actuación policial en dicha restricción sin que exista detención.

92. Por ejemplo, la prueba de alcoholemia en la vía pública cuenta como una restricción temporal de la libertad que no amerita o da lugar a una detención propiamente dicha; por otro lado, cuando un agente policial para a un vehículo por exceso de velocidad, ello cuenta como una restricción a la libertad deambulatoria; sin embargo, si se da cuenta a plena vista que en el interior del automóvil existen armas de fuego de uso exclusivo del ejército, se encuentra legitimado para llevar a cabo la detención correspondiente.

93. Por su parte, para efectos del caso concreto, los registros a una persona o la revisión a su vehículo se actualizan únicamente en los supuestos de detención y de restricción temporal de la libertad personal y deambulatoria. Cuando son realizados posteriormente a una detención, su justificación

---

<sup>29</sup> *Ibidem*, párrafo 112.

<sup>30</sup> *Ibidem*, párrafo 115.

<sup>31</sup> *Idem*.

## AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014

reside precisamente en la causa motivadora de la privación de la libertad, que puede ser la flagrancia en la conducta delictiva. Al contrario, un registro corporal a una persona o la revisión al interior de un vehículo sin haber existido previamente una detención o una autorización válida del posible afectado, debe estar justificado autónomamente bajo una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta ilícita.

94. Por ende, se reitera, la suposición razonable deberá ser acreditada en su momento por la autoridad para que el juzgador pueda convalidar los registros o revisiones y se puedan tomar como válidas las consecuencias o pruebas conseguidas a partir del mismo. Dicho en otra manera, en el supuesto de que no se acredite la justificación de la restricción temporal de la libertad personal, devienen como ilegales las actuaciones o pruebas directamente relacionadas con el actuar ilegal por parte de la autoridad.
95. Podría darse entonces el supuesto en que un control preventivo provisional tenga una relación directa con una detención en flagrancia, por lo cual ésta última no se justificaría si los elementos con la cual se pretende acreditar derivan o provienen únicamente de una restricción temporal de la libertad personal carente de razonabilidad constitucional; es decir, no es posible justificar en todo los casos la flagrancia a partir de elementos conocidos por una restricción temporal de la libertad de una persona que no se haya llevado a cabo de conformidad con los límites establecidos constitucionalmente. A saber, el hecho de que se encuentre en un cacheo psicotrópicos o armas no provoca automáticamente la validez de la intervención a la esfera corporal de la persona, pues ella se pudo haber realizado sin conocimiento previo de la existencia de tales objetos.
96. En cambio, si la flagrancia es autónoma a la restricción temporal de la libertad, es posible validar la detención sin tener que valorar otros aspectos (en ese supuesto nunca hubo restricción temporal, sino directamente detención), o si el control preventivo provisional se efectuó conforme a los lineamientos constitucionales antes apuntados, no habrá consecuencia alguna en los actos posteriores. Como se precisó en el amparo directo en

revisión 3463/2012, “*si tras un control provisional preventivo **legítimo** los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita y, en consecuencia, también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio*”<sup>32</sup>.

II

97. Asentadas las premisas anteriores, esta Suprema Corte considera como **fundado** el segundo razonamiento de agravio del recurrente, suplido en deficiencia de la queja, pues el Tribunal Colegiado no advirtió de manera adecuada las distinciones conceptuales entre un control preventivo provisional (restricción provisional del ejercicio de un derecho) y una detención en estricto sentido, ni tampoco la diferencia en su justificación constitucional.
98. Para el órgano de amparo, aun cuando existieron actos de autoridad previos a la detención, éstos fueron validos desde el punto de vista constitucional simplemente porque los elementos de seguridad contaban con facultades legales para prevenir e investigar la posible comisión de una conducta ilícita. Dicha determinación lleva implícita un entendimiento de la libertad personal y de las restricciones a ese derecho que no es compartida por esta Suprema Corte.
99. El Tribunal Colegiado, con el objetivo de evidenciar si hubo o no una violación al derecho a la libertad ambulatoria de una persona y a sus derechos interdependientes como pueden ser los de libre circulación, propiedad e intimidad, tenía la obligación de haber efectuado el análisis de justificación del control preventivo provisional y, por ende, de la concurrencia de una sospecha razonable.

---

<sup>32</sup> *Ibidem*, párrafo 119.

## **AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014**

100. Dicho de otra manera, el análisis que realizó el Tribunal Colegiado de los argumentos del quejoso sobre la violación a su libertad deambulatoria y de libre circulación previo a su detención se limitó a un estudio competencial, teniendo como base una interpretación restringida del derecho a la libertad personal. Lo anterior, a pesar de que esta Suprema Corte ha sido muy enfática en que la detención no puede ser confundida con otros actos de autoridad, que ameritan un tratamiento distinto, y que el principio pro persona obliga a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación a realizar la interpretación más amplia de los derechos humanos y la más limitada a sus restricciones, como debió haber sido el estudio de validez de limitaciones provisionales a la libertad personal.
101. En esa tónica, la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado contraría lo resuelto por esta Primera Sala en el amparo directo en revisión 3463/2012, el cual ya había sido fallado con meses de anterioridad a la sentencia que ahora se revisa.
102. Adicionalmente, cabe destacar que el órgano colegiado señaló en su sentencia que no era aplicable al caso concreto el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues únicamente regula el derecho a la libre circulación. Esta Suprema Corte tampoco comparte tal determinación. Como se destacó en párrafos anteriores, el derecho a la libre circulación, como la mayoría de los derechos humanos, es interdependiente del de libertad personal, dado que aun cuando en términos generales el primero tiene como contenido que una persona pueda trasladarse libremente de un lado a otro en la República mexicana sin que medie ningún tipo de autorización, la posible afectación a la libertad deambulatoria de una persona incide invariablemente en el goce del primero de los derechos aludidos, al restringir la libertad de movimiento.
103. Por todo lo argumentado, esta Primera Sala considera procedente revocar la sentencia recurrida, sin que se entre al estudio concreto de los conceptos de violación omitidos, toda vez que según criterios reiterados de esta Corte debe devolverse el asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal

del Segundo Circuito a fin de que examine nuevamente los razonamientos del quejoso a la luz del sentido y alcance que se le dio en el presente fallo a los derechos a la libertad personal, propiedad y libre circulación, tomando en cuenta los requisitos necesarios para justificar un control preventivo provisional.

104. Por lo tanto, el órgano colegiado tendrá que pronunciarse si con las documentales, testimoniales y confesionales que constan en la causa penal, existen elementos suficientes para acreditar la viabilidad constitucional de que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, aun cuando tuvieran competencias para prevenir y perseguir conductas ilícitas, restringieran provisionalmente el ejercicio de los derechos del quejoso; es decir, deberá señalarse en un plano de legalidad si en el caso se actualizó una sospecha razonable para el inicio de un control preventivo provisional que derivó en una detención y si las circunstancias del caso ameritaron que el mismo fuera de carácter intenso, al haberse procedido a requerir no sólo la interrupción de la marcha del vehículo, sino al haberse efectuado una revisión de su interior y un registro corporal de sus tripulantes, o en su caso si tal registro o revisión fue autorizada libre y voluntariamente, ello con una valoración conjunta de las pruebas y no meramente a razón de los dichos de los agentes de seguridad.

105. Finalmente, cabe destacar que de un estudio *ex officio* de constitucionalidad del asunto, esta Primera Sala advierte que en el contexto de datos de la fase de investigación, de las pruebas valoradas por la autoridad responsable y a su vez por el Tribunal Colegiado, se observa un factor conector con la tortura aducida por el quejoso sin que conste en autos que se hubiera investigado la misma.

106. Desde su declaración ministerial y preparatoria, el quejoso sostuvo que fue objeto de tortura. Al respecto, consta en la averiguación previa un dictamen de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Delegación Estatal

## **AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014**

en el Estado de México de la Procuraduría General de la República, en el que perito médico oficial señaló que el detenido presentaba varias heridas, entre ellas una equimosis de un centímetro de diámetro en la región púbica derecha<sup>33</sup>, lo cual coincide con las afirmaciones del quejoso de que recibió toques eléctricos en sus testículos.

107. Sobre ese tema, en el amparo en revisión 703/2012 y en el amparo directo en revisión 90/2014, esta Primera Sala ha destacado la obligación de investigar los hechos de la alegada tortura conforme a los estándares internacionales, a fin de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades.
108. En consecuencia, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal; 1, 3, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1, 3 y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se da vista al Procurador General de la República para que actúe conforme a sus atribuciones constitucionales y obligaciones convencionales y de conformidad con los estándares internacionales precisados en la investigación de los datos de posible tortura en contra del quejoso.

### **IX. DECISIÓN**

109. Por lo expuesto, ante lo fundado del agravio del recurrente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, en la materia de la revisión, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y devolver los autos relativos al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el juicio de amparo directo \*\*\*\*\*, a fin de que, partiendo de la interpretación constitucional expuesta en la presente ejecutoria y conforme a los lineamientos señalados en el apartado anterior, se avoque de nueva cuenta al estudio de la legalidad de la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil trece por el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en el toca penal \*\*\*\*\*que constituye el

---

<sup>33</sup> Véase, hojas 56 a 58 y 117 a 120 del tomo I del expediente de la causa penal \*\*\*\*\*.

## **AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014**

acto reclamado en el juicio constitucional del que deriva el presente recurso de revisión.

Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

**SEGUNDO.** Devuélvanse los autos al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para que emita una nueva sentencia en el juicio de amparo directo \*\*\*\*\*, bajo el sentido y alcance que se ha fijado en esta ejecutoria.

**Notifíquese;** con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos de la Ministra y los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra de los emitidos por los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien se reserva el derecho de formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de esta Primera Sala.

Firman el Ministro Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

**PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA**

**MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO**

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1596/2014**

**PONENTE**

**MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA**

**SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA**

**LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES**

En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II, 13, 14 y 18, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.